

LA IMPUNIDAD ECONÓMICA

Rubén Lo Vuolo¹

La impunidad de los reiterados personajes de la tragedia argentina contemporánea, no reconoce límites. Al momento de escribir estas líneas, Domingo Cavallo sigue posponiendo el anuncio nuevas medidas para continuar su obra, Francisco Macri acompaña reclamando que, al igual que en el pasado, el eterno Regente le absorba la carga financiera de sus deudas.

¿En qué se conjugan los reclamos del empresario acostumbrado a prebendas y las incongruentes políticas del Ministro? En que ambas buscan consolidar los procesos que llevaron a este desastre: mayor concentración de riqueza, aumento del endeudamiento público, capitalización selectiva de grupos de poder y achicamiento de los márgenes de maniobra de la política pública. La absorción de pasivos empresarios es una constante de la política “liberal” argentina; además, existen antecedentes inmediatos, como la ley aprobada por la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires que posibilitó el traspaso de la cartera de créditos incobrables del Banco de la Provincia de Buenos Aires (Bapro).

El problema del endeudamiento empresario es real: la gran mayoría de las empresas enfrentan serias dificultades de orden financiero. Sin embargo, el origen del problema no es coyuntural sino que responde a la dinámica endógena de un esquema que privilegia la regulación social del capital financiero. En un artículo anterior explicaba que este particular régimen de organización económica y social favorece la especulación por sobre la producción y la transferencia del riesgo empresario hacia los eslabones débiles del sector productivo: los trabajadores y las empresas de menor tamaño.

Esta forma de regulación económica pone a las empresas y al país al servicio de transformar la riqueza presente y futura en activos líquidos, maximizar dividendos, pagar deudas, tomar nuevas deudas y así alimentar el circuito. Esto es lo que fuerza un permanente ajuste del capital productivo y del trabajo. Este proceso trasciende el campo estrictamente

¹ Economista, investigador del Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas (Ciepp) y docente universitario.

económico para convertirse en un proyecto de índole política que involucra a todo el sistema social y que no sólo genera una economía inestable e ineficiente, sino que tiene límites muy precisos porque sus crisis siempre requieren de una solución “externa” a los mercados financieros.

Dos elementos son centrales para el ejercicio del poder financiero: liquidez y deuda. El poder del capital financiero surge de la capacidad que tiene para transformar los activos líquidos que controla en deuda y la deuda en propiedad.

Mediante estos instrumentos, el capital productivo se somete por dos vías al capital financiero. Una, por las deudas asumidas para funcionar; otra, por la presión de obtener altas rentabilidades de corto plazo para transferirlas como dividendos a inversores que tienen como costo de oportunidad una elevada tasa de interés. Si a esto se suma que Argentina es de los pocos países donde los dividendos no están gravados por el impuesto a las ganancias, se entiende la coherencia del proyecto. Esto no sólo que es ineficiente en términos productivos sino que puede atentar contra la propia supervivencia de la empresa.

Las consecuencias para la economía son tremendas. Primero, al subir la tasa de interés, baja la inversión y cae el crecimiento. Segundo, provoca una tendencia regresiva en la distribución del ingreso. Tercero, establece estímulos ineficientes para la actividad económica. Cuarto, alienta trayectorias insostenibles por el creciente peso del endeudamiento.

El poder del capital financiero no permite la selección eficiente de la asignación productiva de los recursos y mucho menos en los términos que exige el desarrollo de largo plazo de una empresa o de una economía. En este régimen de organización económica y social, el interés particular nunca puede reconciliarse con el interés general. Por eso, el proyecto político y económico sometido a esta lógica es incapaz de autoregularse y las consecuencias están a la vista. En su inestabilidad no sólo arrastra a la economía sino también al sistema político y amenaza la propia integración social.

En este juego perverso e ineficiente, no todos pierden. Por ejemplo, es claro que ganan los que tienen su actividad productiva suficientemente integrada con instituciones financieras; los que tienen escala para acceder al mercado financiero en condiciones más favorables: los que obtienen ganancias suficientes para auto-financiarse. También, los que –gozando de las condiciones previas- optan por obtener beneficios mediante la valorización financiera en la

propia empresa, en desmedro de la actividad productiva que supuestamente justifica su existencia. En otras palabras, no puede decirse que el problema del control financiero de la economía afecte a todos por igual.

Pero estos beneficios son particulares y no alcanzan a todo el sector productivo ni al país en su conjunto. La actual situación de endeudamiento de las empresas no es homogénea, no responde a las mismas causas y no puede resolverse con medidas universales. No hay dudas que son las tan vilipendiadas Pymes las que no tuvieron salvaguardas y las que fueron más maltratadas por parte del sector financiero, mientras que gran parte de la cúpula empresarial lucró con el “modelo”. ¿Cómo? Apropiándose de rentas públicas (empresas y mercados de bienes públicos), realizando luego el capital a valores financieramente inflados, fugando capitales, gozando de protecciones específicas en una economía abierta.

Una economía y una sociedad regulada por el poder financiero no puede sostenerse sino mediante tremendas y desiguales transferencias de riqueza garantizadas por el poder político. En este juego tarde o temprano se llega al punto en que la “mano invisible” del mercado termina pidiendo ayuda a la “mano visible” del Estado. El reclamo de Macri es la prueba más flagrante de la inoperancia del tipo de capitalismo de mercado instaurado en el país: no sólo no creó un sistema económico privado capaz de reemplazar al Estado, sino tampoco una clase de “grandes” capitalistas en condiciones de hacerlo.

El señor Macri sabe a quien le habla. Es el mismo Domingo Cavallo que mientras el país trataba salir de una sangrienta dictadura militar que lo había arrastrado a una guerra insensata, se dedicó en 1982 a capitalizar por medio de un seguro de cambio a los grupos económicos que se beneficiaron de la más negra página de la historia argentina. Esta medida definió la dinámica económica cuyos efectos perversos se vieron en los años posteriores.

Como en aquel momento, también el sector financiero (vinculado en muchos casos a los grandes grupos económicos) sería el otro gran beneficiario. Evitaría quebrantos y mejoraría la calificación de su cartera créditos, transfiriendo a la sociedad el costo de su propia ineficiencia para asignar los ahorros de los argentinos y promover la inversión y el crecimiento.

El endeudamiento y la falta de rentabilidad de los eslabones más débiles del sector productivo, es una consecuencia lógica del régimen económico adoptado. Políticas aisladas no resolverán el problema. Mucho menos estatizando el “costo” de mantener ciertos miembros

de la “clase empresaria”, que es igual o más alto que el de mantener a sus socios de la “clase política”.

Hay que cambiar de políticas. Pero la impunidad y connivencia entre desvergonzados exige que no lo hagan ellos... porque seguro pierde el país.